



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 136

Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **CESAR AUGUSTO JIMÉNEZ GIRALDO** contra **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, identificado con numero de radicado **05001-31-05-014-2020-00363-01**.

Se reconoce personería al doctor SERGIO ARMANDO LUGO ABRIL con tarjeta profesional 362.635 del Consejo Superior de la Judicatura, para representar los intereses del señor Cesar Augusto Jiménez Giraldo.

A continuación, la Sala conformada por los magistrados VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES como magistrado ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 037 de discusión de proyectos, adoptó la decisión que se consigna enseguida:

1. ANTECEDENTES

1-Presento demanda ordinaria laboral el señor Cesar Augusto Jiménez Giraldo en contra de Empresas Públicas de Medellín, buscando que previa declaración de la ineficacia del despido por encontrarse amparado por la estabilidad reforzada, se ordene a la demandada a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando al momento del despido o uno similar; que se

condene al pago de salarios y acreencias dejadas de pagar; la indemnización por despido injusto y la indemnización de 180 días de salario (03. 2020-00363 DemandaConAnexos pags. 6 y 7).

2.-EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, al contestar la demanda, propuso la excepción previa de cosa juzgada, ya que las pretensiones fueron debidamente resueltas por la Juez Segunda Civil Municipal de Oralidad y el Juez Quince Civil del Circuito, en primera y segunda Instancia respectivamente, presentándose todos los presupuestos procesales de la cosa juzgada, tales como identidad de partes, causa y objeto (05. 2020-00363 ContestaciónEPM págs. 21 y 22).

3.-En audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, realizada el 26 de abril de 2022, el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ probada la excepción previa de COSA JUZGADA propuesta por EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN EPS, en razón a que hubo un pronunciamiento expreso sobre los hechos materia del presente juicio laboral ordinario por los jueces constitucionales de tutela (18. 2020-00363 VideoAudiencia)

4.- Contra la decisión anterior la apoderada de la demandante, interpuso recurso de apelación, señalando que la acción de tutela se interpuso para evitar un perjuicio irremediable, y el amparo de manera transitoria de la estabilidad laboral reforzada, porque el escenario para discutir esos asuntos es la instancia del proceso laboral.

5.- El A quo concedió el recurso de alzada.

2. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante presentó alegaciones, señalando que en defensa de sus derechos fundamentales su mandante interpuso acción de tutela contra la hoy demandada, al considerar vulnerados sus derechos y no disponer de un mecanismo eficaz que evitara un perjuicio irremediable, dejando consignadas en las pretensiones de la acción de

tutela, que esta, se presentaba como MECANISMO TRANSITORIO, prueba de ello son las pretensiones de la tutela. Que resulta evidente que el a quo realizó una valoración superficial sobre el material probatorio, determinando que una acción de tutela es el mecanismo definitivo para resolver las controversias que se suscitan de una relación laboral, y que por tanto, ya existió un pronunciamiento definitivo sobre el despido discriminatorio efectuado contra su representado, vulnerando el derecho que tiene el trabajador de presentar y ejercer pruebas que sirvan de evidencia de su condición de salud. Solicita se revoque la decisión.

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín, indicó que tiene sentido, que se haya declarado próspera la excepción previa de cosa juzgada, toda vez que ya se analizó la situación de fondo del hoy demandante por parte del juez constitucional, este valoró las pruebas, los argumentos de la parte actora y de la defensa, analizó la jurisprudencia relacionada y fijó su criterio frente al derecho pretendido, es por esto que no se requiere desgastar el aparato judicial, creando otra alternativa jurídica para reclamar los mismos derechos que ya fueron analizados por un Juez de la República, y que se pretenden revivir con la presente demanda, trayendo a colación lo señalado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL15882-2017, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

3. CONSIDERACIONES

Análisis jurídico.

1. **Quid Juris:** Consiste en que se determine en este asunto, si existe cosa juzgada, en relación a la acción ordinaria propuesta por parte del actor, con el fin de se estudien sus derechos legales originados en una relación de trabajo, y la declaratoria del juez constitucional, de no proteger el derecho constitucional pretendido en acción de tutela.
2. La **Cosa Juzgada**, como institución procesal está reglada por el art. 303 del CGP ante la usencia de norma que lo regule en lo laboral, integrándose entonces en base al art. 145 del CPT y SS al presente asunto.

Regla esta norma, *"La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes."*

2.1. La excepción en estudio conforme lo dispone el art. 32 del Adjetivo laboral y Seguridad Social, es viable estudiarse como previa y tramitarse en la audiencia del art. 77 de la legislación seguidamente anotada.

2.2. La Corte Constitucional, sostiene en la **C-100/19**, lo siguiente:

"COSA JUZGADA-Efectos

*En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, **el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico.** Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio.*

COSA JUZGADA-Funciones negativa y positiva

La cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico."

En cuanto a los elementos a cotejar, esto señaló:

"Para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

*- **Identidad de objeto**, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. **Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.** Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.*

*- **Identidad de causa petendi**, esto es, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener **los***

mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, ***solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos,*** caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

- ***Identidad de partes,*** lo que implica que al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.”

2.3. Sobre este tema, la Sala laboral de la Corte, descongestión en la **SL 13012019** del 12-03-2019, al respecto consideró, que, para que se predique el fenómeno de la Cosa Juzgada, es necesario que exista identidad entre dos procesos que conocen del mismo tema, cuya identidad esté relacionada:

- i) Con las personas o sujetos-eadem personae-, es decir demandante y demandado;*
- ii) Objeto o cosa pedida-eadem res-, esto es el beneficio jurídico que se solicita o reclama y no el beneficio material;*
- iii) Causa de pedir-eadem causa petendi-, es decir, el hecho material que sirve de fundamento al derecho reclamado o la razón por la que se demanda.”*

La **SL 4717 de 2018**, en cuanto al *fin* que persigue la institución estudiada, sostiene:

- i)La Cosa Juzgada constituye una garantía al debido proceso, cuya estricta observación configura la materialización del derecho.*
- ii)Atiende y respeta el principio de Inmutabilidad de una sentencia judicial.*
- iii)Todo proceso está llamado a ser solucionado de manera definitiva, no puede permanecer una controversia indefinidamente.”*

2.4. En la Sentencia **T-794/12**, al examinarse una situación en la cual se desconoció lo decidido en un fallo de tutela de manera definitiva se precisó lo siguiente:

“19. Aquí la Sala considera pertinente aclarar que las órdenes de los jueces constitucionales deben ser interpretadas razonablemente de conformidad a la parte motiva de la sentencia y los postulados superiores, so pena de continuar la vulneración de los derechos fundamentales. Por ello, no es de recibo para esta Sala la interpretación del ISS conforme la cual, en los eventos en los que, a juicio de la administradora, el juez

constitucional no haya aplicado o interpretado correctamente las normas pensionales vigentes, esta tiene la facultad de definir el alcance temporal del reconocimiento prestacional. Así como tampoco acepta esta Corte el segundo argumento propuesto por el ISS, el cual sugiere que, cuando el juez constitucional no dice explícitamente en la parte resolutive que el amparo es definitivo debe entenderse que es entonces transitorio, toda vez que una interpretación en tal sentido desconocería que la carga impuesta al tutelante de acudir a un proceso ordinario debe constar en la sentencia.

(...)

*21. Ahora bien, la Sala también recuerda que **la jurisprudencia constitucional ha sido coherente en afirmar que el deber de cumplir los fallos judiciales, es una manifestación del Estado social de derecho**, por medio del cual se pretende garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos que han acudido a la administración de justicia. De allí que la garantía al acceso efectivo a la administración de justicia, contemplada en el artículo 229 de nuestra Constitución, comprenda al menos las siguientes tres dimensiones: (i) la facultad de cualquier ciudadano de acudir a las autoridades judiciales en busca de una solución, (ii) la resolución del asunto puesto a consideración mediante una providencia, y (iii) **el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el operador judicial**. Por ello, cuando una autoridad no ejecuta las órdenes proferidas por un juez de la República, desconoce el derecho fundamental a acceder efectivamente a la administración de justicia.*

*25. En la línea de esas consideraciones, esta Sala advierte que al no acatar en su integridad el fallo proferido por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, confirmado por el Tribunal Superior de Santander, por medio del cual se le había ordenado efectuar el reconocimiento definitivo de la pensión de vejez del accionante, el ISS le **violó sus derechos fundamentales acceder efectivamente a la administración de justicia y al debido proceso y lo indujo a error**, pues lo hizo ver obligado a iniciar un proceso ordinario laboral para someter a definición judicial un asunto que ya había sido dirimido definitivamente por el juez constitucional.*

De lo anterior queda claro, el deber de toda autoridad respetar las sentencias de tutela debidamente ejecutoriadas, es decir, que se encuentren revisadas incluso por la Corte Constitucional; por lo tanto, las ordenes de los jueces constitucionales deben ser interpretadas razonada y lógicamente con lo contenido en la parte considerativa y resolutive, por lo que al examinarse no se puede llegar con interpretaciones ajenas a éstas.

3.- Caso en estudio.

3.1. Al examinarse la demanda queda plasmada la coincidencia en las **identidades de los sujetos** que intervienen en ambos procesos, es decir, el actor y la accionado EPM; asimismo, en lo fundamental, son los mismos **hechos** que estructuran la acción constitucional y ordinaria; ya que se hace referencia a la existencia de un contrato de trabajo, al oficio realizado, a la terminación del contrato de trabajo por parte del empleador y el estado de salud del actor al momento de finalizarse el contrato de trabajo (cuadro clínico de embolia pulmonar, cardiopatía, insuficiencia venosa crónica, enfermedad pulmonar; en cuanto a **lo pretendido**, en la demanda, se solicita, **i)** que se declare la ineficacia jurídica de la resolución #23019110014408 de fecha 30-05.2019, **ii)** se declare el derecho a la estabilidad laboral reforzada y como consecuencia **iii)** el reintegro y la indemnización relacionadas en el art. 26 de la ley 391/97, **iv)** pagos de salarios y prestaciones dejadas de cancelar a partir de la terminación del contrato de trabajo y **v)** indemnización del art. 64 del CST por despido injusto. La demanda de tutela contiene como pretensiones (folio 250 del archivo de contestación de la demanda): **a)** se conceda el amparo de los derechos fundamentales como mecanismo transitorio, **b)** el reintegro y **c)** pago de salarios y prestaciones causadas a partir de la terminación del contrato.

Para la Corporación considera que lo pretendido no es idéntico en principio, si bien, surge la petición en ambas acciones el reintegro e indemnización y pago de salarios y prestaciones sociales; se dejó de manera clara e inconfundible en la acción constitucional, la solicitud de amparo y protección de los derechos fundamentales del actor y en la demanda ante la jurisdicción ordinaria, solicito se decidiera lo pertinente a derechos legales e incluso a la indemnización del art. 64 del CST.

En **síntesis**, no hay identidad **eadem res**, esto es el beneficio jurídico que se solicita o reclama y no el beneficio material entre las dos acciones.

3.2. A hora, no puede pasar por alto la colegiatura, que la decisión de fondo del A-quo, está fundada en que la sentencia del juez constitucional decidió de manera definitiva el asunto puesto a consideración en esta jurisdicción; no obstante reconocer, que las sentencias de tutela no era clara la decisión de definir los derechos debatidos, por lo que procedió a deducir, sobre todo del juez de segunda instancia, que la sentencia tenía visos definitivos con relación a los derechos perseguidos por el actor en el proceso ordinario.

Inicialmente no sobra resaltar, que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, se han referido al tema en aquellos eventos, en donde al actor al protegérsele y tutelarse los derechos constitucionales, se les reconoció un derecho legal de manera definitiva, que es algo excepcional en sede constitucional en razón a las exigencias para este reconocimiento.

Pero bien, al examinarse el asunto desde la perspectiva del a-quo, encuentra la Sala, lo siguiente:

i)Al examinar la sentencia del juez 2º Civil Municipal de Oralidad Medellín, proferida el 03-07-2019; la parte considerativa, de antemano trajo como fundamento de su decisión sentencias de la Corte Constitucional y en especial la T-706 de 2013, en las que se hacía hincapié en el carácter excepcional y residual de la acción de tutela, y consideró lo siguiente:

*"Así las cosas, atendiendo a que en el presente asunto no se cumplen los presupuestos señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para atender el reintegro laboral... y dado el carácter excepcional y residual de la acción de tutela, **esta vía no resulta ser la adecuada para discutir la validez o no del despido, ni siquiera como un mecanismo transitorio, y en tal orden, deberá acudir a la justicia ordinaria laboral...***

Por lo tanto, en relación con el reintegro, si el señor Cesar Augusto Jiménez Giraldo, estima que su despido fue injusto, cuenta con otros mecanismos judiciales para la defensa de sus derechos, pero no es la acción de tutela la herramienta ordenada en esta oportunidad para hacerlo, pues se reitera, no se encuentra acreditada su situación de debilidad manifiesta y por tanto, de sujeto especial protección constitucional. Con fundamento en lo expuesto, Resuelve: Negar la tutela, conforme la parte considerativa."

No queda duda que el juez, zanjó con fundamentos serios, la decisión de no tutelar el derecho constitucional fundamental solicitado y señalándole al tutelante el camino a seguir, de lo que se concluye, que no le asiste razón al A-quo dentro del proceso ordinario, tratar de inocua esta sentencia.

A hora, no se debe partir de la prueba examinada en la acción de tutela para llegar a la conclusión, que la sentencia de tutela decidió de manera definitiva el asunto, cosa diferente, es que pueda servir de base para reconocer el derecho fundamental.

ii)Al examinar la sentencia de segunda instancia, que es donde el A-quo considera que puede inferir, que con la sentencia de tutela se definieron de manera definitiva los derechos legales del actor, encuentra esta Corporación, que el Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín, en decisión del 5 de agosto del año 2019; en breve análisis del caso concreto y previa fundamentación jurisprudencial, concluye:

*"que el actor no ostenta la condición de limitado físico, porque no tiene diagnóstico de una pérdida laboral, lo que significa que **no le asiste el derecho a la estabilidad reforzada...***

*A hora, **la validez legal o no del despido debe ser debatido ante la justicia ordinaria**, quedando excluido este medio constitucional para dirimir el asunto, por lo anterior es imperativo confirmar la decisión de primera instancia. Con fundamento en lo expuesto, Falla: Confirmar íntegramente el fallo recurrido."*

De estas consideraciones el A-quo del proceso ordinario, llegó a la conclusión de la existencia de un fallo definitivo, cuando lo que hace la segunda instancia es recoger lo considerado en primera instancia, hasta tal punto, que confirma íntegramente, sin hacer alusión alguna diferente.

En **síntesis**, la Sala revocará la decisión del auto que decidió la Cosa Juzgada, proferido en audiencia de fecha 26-04-2022, al no hallar que en la acción constitucional se hubiera definido de fondo y de manera definitiva los derechos legales solicitados en este proceso ordinario.

Costas de primera instancia a cargo de Empresas Públicas de Medellín, al no salir avante la excepción previa, sin costas de segunda instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: REVOCA la decisión proferida el día 26 de abril de 2022, por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, de declarar probada la excepción previa de cosa juzgada, y en su lugar se declara impróspera la misma, ordenando continuar el trámite correspondiente, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

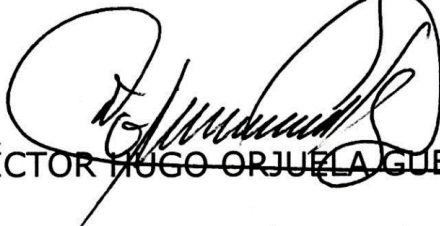
SEGUNDA: Costas de primera instancia a cargo de Empresas Públicas de Medellín, al no salir adelante la excepción previa, sin costas de segunda instancia.

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL – HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por Estados No. **107**
del 21 de junio de 2022.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>